



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/1994/NGO/11
4 de agosto de 1994

ESPAÑOL
Original: FRANCES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías
46° período de sesiones
Tema 6 del programa

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES, INCLUSO LA POLITICA DE DISCRIMINACION RACIAL Y DE
SEGREGACION Y LA POLITICA DE APARTHEID, EN TODOS LOS PAISES Y EN
PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES:
INFORME DE LA SUBCOMISION CONFORME A LA RESOLUCION 8 (XXIII) DE
LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

Exposición presentada por escrito por la Federación Internacional
de los Derechos Humanos, organización no gubernamental reconocida
como entidad consultiva de la Categoría II

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición, que se
distribuye de conformidad con la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico
y Social.

[27 de julio de 1994]

Situación de los derechos humanos en el Togo

1. La Federación Internacional de los Derechos Humanos y su organización
afiliada, la Liga Togolesa de los Derechos Humanos, observan desde hace
cuatro años que la situación en el Togo en materia de derechos y libertades
individuales se agrava, lo que suscita preocupación. Esta degradación se
debe en gran parte a la voluntad del general Eyadema (que es Jefe del Estado
y comandante en jefe del ejército, contrariamente a lo previsto en la nueva
Constitución del Togo) y de su partido, Reunión del Pueblo Togolés (RPT), de
obstaculizar el proceso de democratización.

2. Las matanzas, los asesinatos o las tentativas de asesinatos individuales, las detenciones y arrestos arbitrarios, las torturas y otros malos tratos físicos y la colocación de bombas de plástico en viviendas han constituido los episodios de un folletín dramático cuyos momentos culminantes fueron los asesinatos de la laguna de Bé (12 de abril de 1991); las perpetradas los días 27 y 28 de noviembre y 3 de diciembre de 1991; el ataque de un convoy de la Unión de las Fuerzas de Cambio (UFC, partido de oposición) el 5 de mayo de 1992; el asesinato de Tavio Amarin, presidente de la Comisión Política del Alto Consejo de la República (Parlamento de transición) en julio de 1992; el secuestro de los miembros de este órgano en octubre de 1992, y las matanzas perpetradas los días 25 y 30 de enero de 1993, seguidas del exilio de gran número de togoleses.

Estado actual de los derechos y las libertades en el Togo

3. A la Federación Internacional de los Derechos Humanos y a la Liga Togolesa de los Derechos Humanos les consta que en el Togo no existe actualmente un Estado de derecho, lo que parece coincidir con el violento regreso a la actividad del General-Presidente. En efecto, desde hace algún tiempo las detenciones y los arrestos arbitrarios, las torturas, los registros domiciliarios a horas intempestivas y las ejecuciones sumarias o extrajudiciales son hechos habituales en el Togo. Las libertades, como la libertad de opinión y de expresión, restablecidas durante el período de transición, están desapareciendo gradualmente, mientras que la población de la capital, aterrorizada por el aumento de los asesinatos, no se atreve ya a ejercer su derecho a la libre circulación durante la noche.

4. Así, el 26 de agosto de 1993, 40 personas detenidas en Agbandi y Diguina (localidades del centro del Togo) fueron golpeadas y posteriormente encerradas en una minúscula celda con capacidad para sólo 5 personas, en la gendarmería de Blitta. Unas 20 de estas personas murieron por asfixia. Se las acusó de haber destruido algunas urnas que habían sido colmadas ilegalmente antes de que comenzara la elección presidencial. El 15 de febrero de 1994, el Sr. Gaston Edeh, diputado recientemente elegido del Comité de Acción para la Renovación (CAR, principal partido de oposición) y otras 2 personas, Prosper Hillah y Martin Agbenou, secuestrados por los militares el 13 de febrero en su propio vehículo junto con una cuarta persona que logró huir, fueron encontrados muertos y sus cuerpos calcinados en dicho vehículo. Entre el 6 y el 8 de enero de 1994, 36 personas que habían sido consideradas sospechosas y detenidas tras un ataque realizado contra el campamento militar de Tokoin, así como 12 soldados arrestados en marzo de 1993, fueron ejecutados sumariamente.

5. También se perpetraron otros asesinatos y agresiones físicas por parte de hombres armados o que vestían uniformes militares:

- la Sra. Abotsi, esposa del Sr. Kwami Abotsi, antiguo prefecto, recibió heridas al mismo tiempo que un sobrino suyo resultaba muerto (abril de 1994);
- el Sr. Idrissou Tchao fue raptado y asesinado el 25 de enero de 1994;

- el Sr. Raphaël Bedou, administrador de la Dirección de Hacienda, fue asesinado el 25 de mayo de 1994;
- el Sr. Paulin Satchivi, empleado de banco, y su esposa, Brigitte, fueron gravemente heridos de bala en su domicilio;
- el 3 de junio de 1994 fue asesinado el Sr. Messan Christophe Agbakpem, ejecutivo de una institución bancaria;
- el 11 de junio de 1994 fueron asesinados el Sr. Agbodjan (maestro cervecero), y su amiga Julienne Hetsa;
- el 14 de junio de 1994 fue gravemente herido de bala el Sr. Vincent Ketemepi, ejecutivo de una institución bancaria;
- el 17 de junio de 1994 fueron asesinados en su domicilio el Sr. Bellow, agente de comercio, y su esposa;
- el mismo día el Sr. Komla Joseph Atsou, asegurador y jefe de la agencia Sogerco, que había desaparecido el día 14 de junio cuando regresaba a su domicilio, fue encontrado muerto y enterrado en terrenos pertenecientes al estado mayor de las Fuerzas Armadas de Togo, en Lomé;
- el 18 de julio de 1994, alrededor de las 2.00 horas de la madrugada, fue ametrallado y apuñalado en la localidad de Aflao Soviébé, un barrio periférico de Lomé, el Sr. Anka Allado, militante del CAR y primo de Me Yaovi Agboyibor, presidente de ese partido; murió ese mismo día en el hospital a causa de las heridas recibidas.

6. A esta lista, que no es exhaustiva, se deben añadir numerosas desapariciones y secuestros de parientes de presuntos partidarios de la oposición. Al parecer, muchos de estos asesinatos y secuestros se perpetraron contra ejecutivos, en particular del sector bancario y de la administración, que habían estado a favor de la huelga general realizada entre noviembre de 1992 y junio de 1993, y contra quienes los partidarios del general Eyadema habían expresado claramente sus deseos de venganza.

7. La libertad de prensa ha sido gravemente violada: se han dictado condenas contra periodistas y editores o directores de publicaciones o se los ha obligado a exiliarse. Así, el Sr. Touré Katakpaou, de La Lettre de Tchaoudjo, y Martin Gbenouga, de la Tribune des Démocrates fueron condenados a graves penas de multa y de prisión (el 17 de noviembre de 1993 y el 26 de abril de 1994, respectivamente), y los Sres. Gabriel Agah, de Forum Hebdo, Ekpé Homawoo y Koudahin Daniel Lawson, del Courrier du Golfe, Victor Toulassi, de la Tribune des Démocrates, David Ekoudé Ihou y Jean Ihougan, del Ibanou Express y Bertin Kagni Foli, de La Parole, fueron obligados a exiliarse (el Sr. Foli murió en Cotonú el 15 de mayo de 1994). Además, se perpetraron atentados con bombas contra ciertas imprentas y

redacciones, al mismo tiempo que se ha organizado la persecución sistemática de los vendedores y distribuidores de periódicos, cuando no se ha procedido a la incautación ilegal de éstos.

Impunidad e independencia del poder judicial

8. La agravación de la situación existente en el Togo, que se desprende de estas flagrantes violaciones de los derechos humanos, se explica especialmente por la falta de funcionamiento de la justicia y la impunidad total de que gozan los autores de esas violaciones. En efecto, los responsables de las torturas, los disparos sin advertencia previa contra manifestantes, las ejecuciones extrajudiciales, los atentados con bombas de plástico contra domicilios, oficinas y vehículos, y las violaciones, que son a menudo integrantes de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad o miembros de las milicias del RPT, están absolutamente seguros de que no serán enjuiciados, pese a que el Jefe del Estado aprovecha todas las ocasiones para "condenar públicamente" estos actos de violencia y "vociferar" contra sus autores. Los malhechores actúan así, si no obedeciendo a órdenes, por lo menos sabiendo que no corren ningún riesgo de ser enjuiciados. Incluso cuando los autores son conocidos, la policía y la justicia no reaccionan. Se han denunciado ante la Conferencia Nacional (1991) numerosas violaciones de los derechos humanos, pero sus autores, cuyos nombres se conocen, no han sido hasta ahora molestados. Además, después del asesinato del Sr. Tavio Armorin, y aunque sus autores -los policías Kossi Karewe y Boukpassi- fueron identificados y designados por sus nombres en un comunicado del Ministerio del Interior, nunca se inició contra ellos un proceso judicial. Tampoco se procedió a incoar ningún proceso cuando, tras el atentado del Soudou contra la comitiva de la UFC, perpetrado el 5 de mayo de 1992 -que ocasionó numerosos muertos, entre los que figuró el Sr. Marc Attidepe, diputado y jefe de partido, y también heridos, entre ellos el Sr. Gilchrist Olympio, presidente de la UFC- una comisión internacional de investigación designó claramente a los autores, entre los cuales figuraba el propio hijo del general Eyadema (el capitán Ernest Gnassingbe). Lo mismo ocurrió en el caso de los militares que secuestraron y golpearon a los parlamentarios togolese en octubre de 1992 (también en este caso participó el capitán Ernest Gnassingbe) y de quienes ordenaron la acción (entre ellos el Ministro Gabriel Agbeyomé Kodjo).

9. En realidad, cuando se trata de un hecho cometido contra un miembro de la oposición o una persona de quien se presume que pertenece a ella, o cuando el acto es cometido por soldados o milicianos del RPT, el sistema judicial y policial queda absolutamente paralizado. Por el contrario, cuando el Jefe del Estado o sus partidarios formulan reclamaciones, el sistema recupera toda su eficacia. Esto explica las condenas dictadas contra periodistas, que se han mencionado anteriormente. De este modo, la justicia togolese aplica un doble rasero. Asegura la "justicia" y la impunidad a una categoría de ciudadanos y deniega la justicia a la otra parte de la población, y todo esto mediante un poder judicial que carece de toda independencia. En efecto, los jueces que no se someten son destituidos. Así el presidente del Tribunal Superior, el Sr. Apaloo, ha sido obligado a exiliarse. En cambio, el magistrado Akati Azangou se ha sometido hasta el punto de hacer comparecer a

los sospechosos en los locales de la gendarmería en lugar de hacerlo en su oficina, todo esto obedeciendo a órdenes del jefe de la gendarmería. Este fenómeno se reproduce en otros niveles del sistema judicial, ya que la Sra. Fiadjoe, que tenía a su cargo la organización y la supervisión de las cárceles, también tuvo que huir del país y exiliarse.

10. La Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Liga Togolesa de los Derechos Humanos comprueban con suma preocupación que esta situación lleva a una parte de la población togolesa a buscar refugio en Ghana y en Benin, mientras que otros togoleses desarrollan progresivamente su propia estrategia de autodefensa, que incluye desde la construcción de barricadas hasta la adquisición individual de armas de fuego.

11. Ante esta situación, que constituye un serio factor de desestabilización regional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Liga Togolesa de los Derechos Humanos instan al Gobierno del Togo a que adopte todas las medidas necesarias para poner fin a las violaciones de los derechos humanos, determinar las responsabilidades en las violaciones producidas hasta ahora y permitir el regreso de los refugiados. Solicitan a la Subcomisión que preste una especial atención a las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos en el Togo y que señale esta cuestión a la atención de la Comisión de Derechos Humanos a fin de que ésta designe un relator especial.
